

Antofagasta, a dieciséis de junio de dos mil veinte.

**VISTOS:**

En la causa rol 2.891-2017 del Tercer Juzgado de Letras de esta ciudad, por sentencia de veintidós de marzo del año dos mil diecinueve, complementada por la de cinco de abril de ese mismo año, se hizo lugar a la demanda de indemnización de perjuicios deducidas por don Rubén Robinson Onetto y la Sociedad Servicios Médicos Robinson Limitada en contra de don Waldo Arnoldo Riveros Saavedra, condenándolo a pagar indemnización por daño emergente y moral.

La sentencia rechazó la demanda en cuanto pedía que se condenara, por los mismos hechos, a las sociedades Auditores Consultores Riveros Asociados S.A. y BDO Chile Riveros Asociados S.A.

En contra del referido fallo el demandado señor Waldo Arnoldo Riveros Saavedra, dedujo recursos de casación y apelación subsidiaria, fundando el primero en la existencia del vicio previsto en el artículo 768 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, esto es, no cumplir la sentencia los requisitos legales previstos en el artículo 170 N° 4 y 5 del mismo cuerpo legal.

A su turno los demandantes se adhirieron a la apelación.

**CONSIDERANDO:**

**EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA:**

**PRIMERO:** Que se ha interpuesto recurso de casación en la forma, invocando la causal prevista en el artículo 768 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, por no cumplir la sentencia, a juicio del recurrente, los requisitos previstos en el artículo 170 N°s 4 y 5 de dicho cuerpo legal.

Indica que la sentencia no analiza, conforme a los estatutos propuestos, las teorías de las partes y tampoco la prueba producida en el juicio con relación a las pretensiones de las partes.



Señala que el fallo estima que la sentencia penal tiene influencia en este caso y descarta la legitimación pasiva de las sociedades demandadas y, cree que, conforme a ello, el perjuicio determinado en la causa penal es el que debería ser declarado en la causa civil, pero el tribunal abandona esta tesis, y con la mera descripción de los medios probatorios, llega a una conclusión que resulta diferente a la penal.

Tampoco se razona cómo se hace lugar a los perjuicios indirectos, especialmente por cuanto en la causa tuvo un acusado persona natural y una sociedad como querellante y no a don Rubén Robinson como persona natural.

Añade que no sabe cómo se concluyó que es daño emergente una serie de conceptos asociados a la situación de endeudamiento de la sociedad demandante con el Fisco ni como se concluye la causalidad con la actividad tributaria del señor Robinson o la de este último con respecto al daño moral.

Añade que tampoco se razona sobre la cuantía de los daños declarados.

**SEGUNDO:** Que deducida la causal de casación prevista en el artículo 768 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, esto es, haber sido pronunciada con omisión de cualquiera de los requisitos enumerados en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, deberá ser desestimada pues el recurrente no ha experimentado un perjuicio sólo reparable con la anulación del fallo, en la medida que, al interponer conjuntamente el recurso de apelación, mediante este arbitrio este tribunal se hará cargo de los supuestos vicios concurrentes en la sentencia.

**EN CUANTO A LOS RECURSOS DE APELACIÓN:**

**VISTOS:**

Se reproduce la sentencia en alzada, previa eliminación de sus considerandos decimocuarto, decimoquinto y vigésimo segundo.



En el motivo decimoctavo se sustituye la oración: "en el informe... hasta la cifra \$76.308.041.-" por la frase: "los informes contables, pericial y documental allegados a los autos, a la suma de \$78,696,215".

**Y SE TIENE EN SU LUGAR Y ADEMÁS PRESENTE:**

**TERCERO:** Que lo primero que debe consignarse es que se ha demandado en sede de responsabilidad extracontractual por el daño emergente y moral que a los actores, don Rubén Robinson Oneto y la Sociedad Médica Servicios Médicos Robinson Limitada o ROBIMEX LTDA. habría sufrido producto de la apropiación indebida de dineros de la sociedad cometidos por el demandado Waldo Arnoldo Riveros Saavedra, contador, y cuya responsabilidad se atribuye también a las sociedades demandadas, Auditores Consultores Riveros Asociados S.A. y BDO Chile Riveros Asociados S.A., en el curso de la asesoría contable tributaria que el demandado Riveros Saavedra prestó a ROBIMEX LTDA.

El tribunal acogió la demandada solo respecto del demandado Waldo Riveros Saavedra, condenándolo a pagar la suma de \$76.308.041 por concepto de daño emergente y de \$20.000.000 a título de daño moral, rechazándola respecto de las dos sociedades demandadas.

En contra de la sentencia apeló la parte demandada vencida. Fundó su recurso en que basándose la sentencia civil en la sentencia penal dictada en contra de don Waldo Riveros, la decisión resulta contradictoria con dicha sentencia al determinar un perjuicio diferente con lo declarado en sede penal y que se hayan determinado daños materiales y morales para quienes no fueron intervinientes en dicha causa.

Añade que los perjuicios materiales, además, son absolutamente indirectos, que no tienen relación con el hecho ilícito que les sirve de base, especialmente por ser consecuencia directa de la falta de pago de las obligaciones tributarias que excedían los montos de dinero entregados en su oportunidad.



Dice que la deuda tributaria excedía de los cien millones de peso al tiempo que la suma entregada al demandado fue inferior a los sesenta millones, por lo que la construcción de los perjuicios carece de toda fundamentación, basándose en una mera expectativa del demandante de obtener una condonación tributaria, sin perjuicio que no puede ser considerado perjuicio aquello que depende de la sola voluntad del demandante, pues al demorar el pago de sus tributos transfiere ese efecto jurídico a terceros y, consecuentemente, solo cabría considerar el período 18 de marzo al 20 de noviembre del año 2015.

Considera que la circunstancia que el demandante señor Robinson Onetto haya debido emitir boletas de honorarios por sus servicios, no puede ser considerado un perjuicio pues la elusión o "evasión" (sic) de impuestos que pudiera realizar, mediante la creación de sociedades familiares, no puede ser transferida a terceros.

Dice que, por otro lado, no puede estimarse que exista daño moral si el demandante continuó su vida profesional normal.

Finalmente, en cuanto a la excepción de compensación, señala que la sentencia penal declara expresamente que se pagó a la querellante la suma de \$58.471.566.

Por su parte, los demandantes se adhirieron al recurso de apelación. Solicitaron alzar el daño emergente en la suma de \$13.088.174 y condenar a las demandadas solidarias.

Respecto de lo primero analizó los informes contables y otros antecedentes para llegar a la conclusión que debía aumentarse el daño emergente y, respecto de lo segundo, explica que las sociedades contables demandadas fueron empleadas para consumir el delito y se aprovecharon del mismo, por lo que deben responder por los perjuicios causados.



Finalmente, pidió que se revocara la sentencia en cuanto determinó que cada parte pagaría sus costas, pues los demandados fueron totalmente vencidos.

**CUARTO:** Que en este proceso se ha hecho valer la sentencia penal condenatoria dictada en la causa rol N°115-2017, del Tribunal Oral en lo Penal de esta ciudad.

Debe indicarse que, conforme lo dispone el artículo 178 del Código de Procedimiento Civil: "en los juicios civiles podrán hacerse valer las sentencias dictadas en un proceso criminal siempre que condenen al procesado."

A su turno, el artículo 180 del mismo cuerpo legal establece: *"Siempre que la sentencia criminal produzca cosa juzgada en juicio civil, no será lícito en éste tomar en consideración pruebas o alegaciones incompatibles con lo resuelto en dicha sentencia o con los hechos que les sirvan de necesario fundamento."*

Respecto de estas normas se ha dicho: *"Desde ya resulta dudoso hablar de acción de cosa juzgada cuando no se trata, tout court, del cumplimiento de lo resuelto en la sentencia penal sino de hacerla valer en otra sede jurisdiccional para evitar tener que probar ciertos hechos o circunstancias que ya fueron establecidos institucionalmente en aquella. Es decir, lo que el actor busca en realidad es que lo resuelto por el tribunal penal sea en alguna medida vinculante para el tribunal civil, propiedad de la sentencia que la doctrina y la jurisprudencia denominan de modo constante como efecto de cosa juzgada de la sentencia, siguiendo la terminología del Código de Procedimiento Civil. No obstante, y según lo expresado, pareciera más apropiado referirse a los efectos reflejos de la sentencia, la que en tanto hecho jurídico puede generar efectos directos respecto del condenado e indirectos, colaterales o secundarios respecto de terceros. De allí que esta problemática pueda correctamente ser designada como límites de la eficacia refleja de la sentencia definitiva."* (María Inés Horvitz Lennon, Efectos



reflejos de la sentencia penal condenatoria y su incidencia en los juicios civiles, Revista de Derecho del Consejo de Defensa del Estado N° 35, junio 2016, pág. 48 y 49)

A este propósito se ha sostenido también: *"Por tanto, las sentencias condenatorias (entiéndanse firmes) en materia penal producen cosa juzgada en materia civil, en cuanto el juez con competencia en esta última materia no puede tomar en consideración pruebas o alegaciones incompatibles con lo resuelto en sede penal, o con los hechos que le sirven de necesario fundamento. Así, por ejemplo, si el juez del crimen señaló que la conducta típica fue la falsificación de un testamento, el juez civil que conoce de la acción de petición de herencia sobre la base del mismo instrumento, no puede considerar pruebas o alegaciones en dicho proceso que tiendan a demostrar la validez del testamento. Lo mismo respecto de cualquier otro acto jurídico. Si el juez del crimen condenó a un sujeto como autor del delito de lesiones, no puede el juez civil tomar en consideración alguna prueba o alegación que intente mostrar que dicho sujeto no participó en los hechos que dieron origen al proceso penal y en el cual fue condenado en grado de autor del delito. Tampoco podrá cuestionar la existencia de este hecho típico el tercero civilmente responsable -si lo hubiere- que no intervino en el proceso penal."* (Juan Carlos Marín G. La acción civil en el nuevo Código Procesal Penal Chileno: su tratamiento procesal, Revistas de Estudios de la Justicia, N° 6, año 2005, pág. 40))

Conforme a lo dicho, lo dispuesto en los artículos 178 y 180 del Código de Procedimiento Civil, no constituyen una forma de cumplimiento de la sentencia penal condenatoria, sino, técnicamente, una extensión de sus efectos a la sede civil futura, pretendiendo impedir que entre lo decidido por el juzgado penal y el juzgado civil existan contradicciones; por cierto, en aquellas materias en que, de no existir dichas normas, podría concurrir una duplicidad de pronunciamientos, afectando la certeza jurídica y el principio de economía

procesal y ello, por cierto, mirado, como un resguardo o protección a las víctimas y perjudicados por el delito para impedir que, en sede civil, pueda discutirse nuevamente y, peor aún, determinarse la inexistencia del delito y la participación y los hechos que las fundan.

Por ello, el alcance de la sentencia penal en sede civil está acotado, exclusivamente, a las cuestiones a las que hace alusión el artículo 180 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la prohibición de considerar pruebas o alegaciones incompatibles con lo resuelto en la sentencia, es decir, la decisión de condena y, en segundo lugar, con los hechos penales que en dicha sentencia se hayan establecidos y que hayan servido, en definitiva, para establecer la existencia del delito y la participación de los acusados. Consiguientemente, no tienen el sentido y extensión que pretenden los demandados en orden a que no pueda establecerse un daño patrimonial de monto superior a los perjuicios determinado por la sentencia penal.

En todo caso, es fácil advertir que, técnicamente, la sentencia penal no debe pronunciarse respecto del daño patrimonial causado a las víctimas del delito o terceros perjudicados por el mismo sino, exclusivamente, respecto del monto apropiado conforme a la tipificación del delito de acuerdo a la legislación penal. Así, el artículo 470 N° 1 del Código Penal, al definir el delito de apropiación indebida, determina como verbos rectores la apropiación o distracción de dineros, efectos o cualquiera cosa mueble, exigiendo que los mismos hayan sido recibidos en depósito, comisión o administración o por otro título que produzca obligación de entregarla o devolverla.

De este modo la apropiación, desde el punto de vista penal, está constituida, exclusivamente, por el dinero o bienes que el sujeto activo del delito recibe en depósito, comisión o administración. Por ello, cuando se habla de perjuicio, debiera estar referido a la determinación del



monto apropiado o distraído por el condenado, sin perjuicio de su actualización monetaria, lo que, como se dijo, es distinto al concepto de daño patrimonial respecto del cual versa la controversia civil. En efecto, de acuerdo con la jurisprudencia constante, daño: "es todo menoscabo que experimente un individuo en su persona y bienes, la pérdida de un beneficio de índole material o moral, de orden patrimonial o extrapatrimonial" lo que, se aleja, y con mucho, de lo que requiere constatar la sede penal para determinar la existencia del delito de apropiación indebida.

En otros términos, el juicio penal no tiene, ni necesita, pronunciarse exhaustivamente sobre el daño patrimonial experimentado por las víctimas y terceros perjudicados por el delito de apropiación indebida sino, exclusivamente, determinar el monto apropiado en perjuicio de terceros. Por lo mismo, la extensión de la sentencia penal solo llega respecto de la efectividad de estos tópicos, mas no respecto del daño patrimonial jurídicamente considerado de acuerdo con el ordenamiento civil.

Por lo mismo, no puede pretenderse que lo que pudiera haber dicho la sentencia en esta materia alcance también a la sentencia civil, pues no se encuentra dentro de los marcos de lo previsto en el artículo 180 del Código de Procedimiento Civil que, en este caso, como se adelantó, solo impide discutir la inexistencia del hecho punible y la participación que ha correspondido a los condenados. Por ello se ha dicho: *"De la norma del artículo 178 del Código de Procedimiento Civil sigue que frente una sentencia penal condenatoria no puede el juez civil poner en duda la existencia del hecho que constituye el delito, ni la culpa del condenado. Con todo, la responsabilidad civil requiere de la existencia de un daño que sea causal y normativamente atribuible al ilícito del demandado. Así, aunque en el juicio civil no sea necesario discutir el ilícito, sí lo es para probar y calificar el daño y la causalidad."* (Enrique Barros





Bourie, Tratado de Responsabilidad Extracontractual, página 963, editorial jurídica de Chile, año 2006)

**QUINTO:** Que resulta relevante señalar que, en el juicio penal, se establecieron como hechos de la causa, en lo que interesa para estos efectos, los siguientes: "Rubén Robinson Oneto en su calidad de representante de la sociedad "Servicios Médicos Robinson Limitada" requirió en septiembre de 2011 los servicios de asesoría tributaria a la empresa contable representada por el acusado Waldo Riveros Saavedra, a fin que estructure y gestione un plan de pago de deudas tributarias que arrastraba la Sociedad señalada desde el año tributario 2005 hasta el 2011, en virtud de lo cual se le otorgaron mandatos especiales y judiciales a fin de realizar su cometido. Fue así como en octubre del año 2014 y en circunstancias que de acuerdo al certificado de deuda de la Tesorería General de la República, la Sociedad Médica Robinson Ltda. adeudaba al 30 de ese mes la suma neta \$56.627.197 por concepto de impuestos morosos correspondientes a los folios 91368738 del año 2008; el 94533839 del 2009, el 90161101 del año 2011 y el 227079222 del 2012, con sus respectivos reajustes por la suma de \$7.739.573 e intereses por el monto de \$51.607.253, y asesorado por el acusado le propuso un nuevo plan de pago, por lo que la víctima debió tomar un vale vista a nombre del Servicio de Tesorería General de la República por el monto exacto de la deuda neta, para efectos que el acusado efectuara una solicitud de condonación de intereses penales al SII, lo que efectivamente realizó, otorgándosele al contribuyente mediante la resolución N° 200040 de 18 de marzo de 2015, el 75% de condonación de los intereses señalados, por lo que el acusado debía pagar con el vale vista recibido de la víctima el monto de la deuda neta, quedando pendiente de pago a esa época la suma no condonada por el Servicio."

"Sin embargo, el acusado el día 24 de marzo de 2015



*pagó con el vale vista ya aludido solo el folio 94533839 del año 2009, por la suma de \$26.388.274, en tanto que la diferencia fue usada para pagar: 1) Auditores Consultores Riveros AS, Folio 0070683314 por \$149.703; 0070683115 por \$142.922; 0070683114 por \$154.919; Folio 0070683414 por \$145.614; Folio 0070683215 por \$ 142.922; y Folio 0070683214 por \$150.374; 2) Bdo. Chile Riveros Asociados SA, Folio 5007595482 por \$507.185; y 3) Compañía de Inversiones Inmobiliarias SA, Folio N° 50676772 por \$28.845.284."*

*"De lo anterior tomó conocimiento la víctima en septiembre de 2015, solicitándole explicaciones al encausado, quien de manera sostenida respondió que el vale vista estaba en garantía ante el Servicio de Tesorería, procediendo el afectado a hacer la denuncia ante la PDI y a su vez el acusado a pagar el 20 de noviembre de 2015 la deuda total ascendente a \$20.508.058 correspondiente al folio 227079222 del año 2012."*

Este relato da cuenta del hecho punible y de la participación que en el mismo correspondió, como autor, al demandado Waldo Riveros Saavedra, por lo que, como se adelantó, de conformidad a lo previsto en los artículos 178 y 180 del Código de Procedimiento Civil, son hechos de la causa en el presente juicio.

**SEXTO:** Que indiscutida la participación del demandado Waldo Riveros Saavedra en los hechos transcritos en el párrafo anterior, cabe analizar la responsabilidad que corresponde a las sociedades demandadas Auditores Consultores Riveros Asociados S.A. y BDO Chile Riveros Asociados S.A., punto en el que hay que concluir que lleva razón la parte demandante.

En efecto, las sociedades demandadas son responsables del hecho ilícito en la medida que, actuando el demandado señor Riveros por medio de sus empresas, modalidad

PXCKPZVTFG

de prestación de servicios profesionales por él adoptada, deben responder por los actos de sus órganos y representantes, calidad que indiscutidamente tenía el señor Riveros. Se trata así de una responsabilidad por el hecho propio del empresario que, valiéndose de la organización empresarial creada, como en este caso, pudo ejecutar el delito, en la medida que fue su empresa BDO Chile Riveros Asociados S.A. la contratada para prestar los servicios profesionales, lo que le permitió captar los recursos de los cuales finalmente se apropió como, por otro lado, parte de los mismos fueron empleados en provecho de ambas, de lo que sigue que las dos demandadas, conjuntamente con el señor Rivera son responsables solidariamente del ilícito cometido de conformidad a lo previsto en el artículo 2.317 del Código Civil.

**SÉPTIMO:** Que para determinar los perjuicios experimentados por los demandantes, importancia relevante tiene el informe pericial contable, elaborado por el perito Marcel Aravena Silva. En el mismo, luego de dejar constancia de la documentación que se tuvo a la vista y del objeto del peritaje, se indican cronológicamente los hechos, los cuales, en esencia, son los mismos que estableciera la sentencia penal, ya transcritos en el considerando quinto.

Detalla la pericia que, una vez recibido el vale vista por la suma de \$56.627.197 para pagar la obligación tributaria de la Sociedad Servicios Médicos Robinson Limitada, el demandado Riveros Saavedra sólo pagó uno de los folios adeudados, por un monto de \$26.388.274, al tiempo que con el dinero restante pago ocho folios correspondientes a deudas tributarias de las empresas demandadas y de una tercera, Compañía de Inversiones Inmobiliaria S. A.

Informa que, con fecha 19 de marzo, el Servicio de Impuestos Internos emitió una resolución por la cual resolvió una solicitud de condonación de reajustes, intereses y multas



solicitadas por la empresa Servicios Médicos Robinson Limitada. La condonación correspondió al 75% del interés penal, resolución que fue notificada con fecha 23 de marzo del año 2015.

Agrega el peritaje que al 20 de noviembre de 2015 la sociedad médica tenía una deuda por no pago de impuestos por un valor total de \$95.960.876 por cuatro folios que se indican y, con fecha 20 de noviembre de 2015, se canceló uno de ellos por la suma de \$20.508.058.

Se hace presente el monto de la deuda tributaria de la Sociedad de Servicios Médicos Robinson Limitada en los años 1916, 1917 y 1918, siempre ascendente, con indicación de los folios adeudados.

En cuanto a las consecuencias económicas que el hecho produjo indica, en primer lugar, que habiéndose entregado el vale vista por la suma de \$56.627.197 para el pago de la deuda tributaria, el demandado sólo solucionó la obligación tributaria correspondiente al año 2009, por un valor de \$26.388.274, quedando un saldo del vale vista por \$30.238.923 con el que se cancelaron deudas tributarias ajenas. Indica que el perjuicio de operación corresponde a este último monto apropiado por el señor Riveros Saavedra, valor al que compensa la suma de \$20.508.058 con el cual, el día 20 de noviembre del año 2015, se pagó la deuda tributaria del formulario 22 N° 22707922. De ello colige que el perjuicio asciende a la suma de \$9.730.865.

El peritaje agrega un segundo perjuicio económico correspondiente al mayor valor pagado por el formulario 22 N° 94533839 al 24 de marzo de 2015, ya que la deuda debió haber sido pagada el 24 de noviembre de 2014, fecha en que el demandado señor Riveros tuvo mandato para concurrir a pagar la deuda. En este caso, el perjuicio se valoriza en \$767.199.



Continúa el peritaje señalando que concurre un tercer perjuicio económico, referido al mayor valor que deberá pagar por los formularios 22 impagos N°s. 91368738 y 90161101 de los años 2008 y 2011 respectivamente, por la suma de \$46.029.574 valor actualizado al día 25 de agosto de 2018, que aumenta por cada día que transcurre.

En cuarto lugar, la pericia indica que existe un perjuicio con relación al mayor impuesto global complementario asumido por don Rubén Robinson, por el no pago de la deuda tributaria correspondiente al año 2012, quien debió emitir boletas de honorarios personales lo que afectó su declaración impuesto a la renta para el año comercial 2015. Así, especifica que entre noviembre del año 2014 a noviembre del año 2015, emitió boletas por un monto bruto de \$90.814.103, pudiéndose rebajar, como gastos presuntos, el 30% de los ingresos brutos con un tope de \$8.091.900. Siendo la tasa de impuesto global complementario ascendente al 40%, el impuesto a pagar asciende a \$19.780.403, encontrándose el perjuicio dado por este mayor impuesto que debió asumir el señor Robinson.

En resumen, por los cuatro rubros indicados, el perito concluyó que los perjuicios ascienden a la suma de \$76.308.041.

Se trata de un informe elaborado por un experto en la materia, respetando las normas procesales para su elaboración, con apego a las reglas de su ciencia y acorde con los antecedentes acompañados a la causa, particularmente aquellos que dicen relación con la situación tributaria de los demandantes, en que las conclusiones son el producto de operaciones y cálculos basados en antecedentes objetivos y lo determinado en la causa penal y que no has sido desvirtuados, en esencia, por los demandados, por lo que, consiguientemente, permiten presumir que los perjuicios allí indicados efectivamente son aquellos que experimentaron los



actores y, a falta de prueba en contrario, establecerlos como un hecho de la causa.

En efecto, y sin perjuicio que el propio informe pericial menciona la documentación que se tuvo a la vista para su elaboración, lo cierto es que aparece consistente con la sentencia penal, los documentos que dan cuenta de las operaciones bancarias realizadas a propósito de la asesoría contable prestada por los demandados, como con los distintos antecedentes y certificados emitidos, tanto por el Servicio de Impuestos Internos como por Tesorería General de la República, dando cuenta de la situación tributaria de los demandados, siendo relevante remarcar, como lo hace la pericia, que la condonación a favor de la sociedad médica fue aprobada con fecha 18 de marzo de 2015 por el Servicio de Impuestos Internos mediante Resolución Exenta N°200040.

También la pericia resulta consistente con el informe de auditoría acompañado estos autos a la causa penal, realizaba por la contadora auditora señora Fanny Fuentes Elmes, referente a la situación tributaria y contable de la demandante Servicios Médicos Robinson Limitada informando, en términos generales, en las distintas notas de auditoría que contiene, de manera similar a la concluida en la pericia.

Sin perjuicio de la exactitud del informe pericial debe estarse con la demandante en su recurso de apelación, en cuanto en el mismo se omitió un ítem constitutivo de perjuicio directo.

Esta parte sostuvo que debía agregarse la suma de \$2.388.174, por el pago realizado en noviembre del año 2015, del folio N°227079222 del año 2012, debido que no fue pagado en la fecha que correspondía, en noviembre del año 2014, época en que se le entregaron al demandado Riveros los dineros para ello. Agregó que el peritaje contable no recogió esta partida, pero sí lo hizo el informe emitido por doña



Fanny Fuentes.

En efecto, si bien el peritaje practicado en autos respecto de otros folios da cuenta del mayor valor que se tuvo que pagar por concepto de reajustes e intereses y consiguientemente establece el perjuicio concurrente, respecto de este nada indica, mas como lo señala la demandante, aparece consignado la auditoría tributaria que practicara la señora Fuentes y que se incorporara tanto al proceso penal como al actual. Efectivamente, con las tablas respectivas, este informe especifica que por la diferencia de tiempo en que el folio en cuestión se pagó, originó un aumento ascendente a la suma de \$2.388.174, valor que, en consecuencia, también debe ser sumado a los perjuicios acreditados en el juicio.

**OCTAVO:** Que, como se adelantó, la demanda no impugnó sustancialmente el contenido del peritaje ni el otro informe contable, sobre los cuales se acreditaron los perjuicios económicos experimentados por los actores, pero sí alegó que los perjuicios eran indirectos y no tenían relación con el hecho ilícito que le sirve de base.

Se trata de una alegación que debe ser desestimada. No puede olvidarse que el demandado es un profesional de la contabilidad, que presta asesorías a través de sus empresas, también demandadas, valiéndose, además, de otros profesionales especialistas. Determinado que fueron contratados para realizar una asesoría tributaria que permitiera hacer frente a la deuda impositiva que los actores mantenían y que, sobre dicha base, se elaboró un plan o estrategia destinado a obtener una rebaja sustancial en el monto de lo adeudado, mediando la obtención de una condonación relevante en materia de intereses y reajustes, al apropiarse de las sumas recibidas para hacer frente, conforme la planificación determinada, de la deuda tributaria, las demandadas tenían, por conocimiento y experticia profesional,



cabal conocimiento de los efectos patrimoniales que ello produciría en sus clientes, incluyendo el mayor valor que tendrían que afrontar por la falta de pago de parte de la deuda tributaria. Se trata de daños atribuibles directamente a la acción de los demandados y, por lo mismo, vinculados causalmente a su actuar delictivo y, además, por lo dicho, previsibles para sus autores.

Además, aunque se trata de un daño futuro, es cierto, pues mediante operaciones matemáticas propias de la ciencia contable puede determinarse fielmente cuál es el monto que el arrastre de las deudas causó a los perjudicados, tal y como lo hizo el informe pericial.

Por lo mismo, no puede sostenerse, como lo hace la demandada, que los actores tenían una mera expectativa de obtener, con un monto de dinero menor, la condonación de su deuda tributaria, pues se desentiende absolutamente de la obligación asumida por sus clientes, mediando una planificación profesional, y de la circunstancia que la condonación estaba aprobada por el Servicio de Impuestos Internos y dictada la resolución correspondiente. De esta manera, la sumas de dinero proporcionadas por los demandantes, no estaban destinadas a un mero pago parcial sino enmarcadas en una estrategia general, basada en antecedentes concretos y ciertos, conforme los cálculos efectuados por los demandados, que permitirían la disminución global de la deuda tributaria. Luego, siendo un hecho cierto el ahorro que la planificación de los demandados importaría para sus clientes, son perjuicios directos derivados del delito las sumas apropiadas y no devueltas ni destinadas al fin comprometido, aquellas que pudieron ahorrar lo demandantes de haberse cumplido el programa y los que tuvieron que desembolsar producto de su pago tardío.

En ese entendido, si el actor señor Rubén Robinson Onetto, producto del delito cometido por el demandado





Riveros, debió emitir boletas como persona natural, dejando de lado la estructura societaria elaborado para el desarrollo de su actividad profesional, y ello provocó un mayor pago de impuestos, también se trata de un perjuicio que deriva de la acción delictiva cometida por el demandado y que debe ser reparada por este.

**NOVENO:** Que en lo que dice relación con el daño moral padecido por el señor Rubén Robinson Onetto y teniendo presente que, como señala la sentencia de primera instancia, el mismo está constituido por la afectación de intereses extramatrimoniales, se acompañó a la causa un informe elaborado por la psicóloga señora Priscilla Maffet Huerta quien, además, declaró en el juicio como testigo, dando cuenta que este experimentó un daño psicológico en la medida que el delito del que fue víctima produjo diversas repercusiones en su vida, constituyendo una experiencia vital de alto impacto negativo, que afectó distintas áreas vitales como la laboral, relación de pareja, relación familiar, uso del tiempo libre, estabilidad y proyecciones económicas así como también salud mental y física.

Se trata de las conclusiones a las que llegó un profesional experto en salud mental, y que se condicen con aquello que de ordinario ocurre con personas que son víctimas de un delito de esta naturaleza y que necesariamente repercute de manera profunda, prolongada y grave en múltiples aspectos de su vida, antecedentes que permiten presumir fundadamente que la vida del señor Robinson Onetto experimentó tales padecimientos y, a falta de prueba en contrario, establecerlos como hechos de la causa, afectación de tal naturaleza, particularmente a su salud psíquica que, por su entidad, pueden ser calificados como daño moral.

**DÉCIMO:** Que, sin perjuicio de lo ya dicho respecto de la apelación de la demandante con relación a los perjuicios que lograron acreditarse en el juicio, no puede



hacerse lugar a la pretensión de considerar, como daño, el pago de intereses respecto del crédito hipotecario solicitado para pagar los tributos adeudados, en la medida que este desembolso no se encuentra causalmente unido al hecho delictivo, al tiempo que la reparación íntegra de los demás conceptos demandados conlleva que otorgar este concepto originaría para los actores un enriquecimiento carente de causa.

Otro tanto cabe decir con la petición de que se le pague, a título de daño emergente, la eventual diferencia de valor por la venta de un vehículo de su propiedad que debió efectuar por los apuros económicos en que el actor se vio envuelto, en la medida que sus presupuestos no han sido acreditados.

**UNDÉCIMO:** Que la excepción de compensación deducida por la empresa BDO Chile Riveros Asociados S.A., sobre la base que habría pagado, por la deuda tributaria de los demandantes, la suma de \$58.471.566, debe ser rechazada por impertinente en la medida que los pagos efectuados, tanto conforme al contrato de prestación de servicios, como con posterioridad a la apropiación indebida de dineros, han sido debidamente considerados en el cálculo efectuado por el perito de los perjuicios causados a los actores y, consecuentemente, no puede decirse que los actores sean deudores de los demandados y, consecuentemente, nada hay que compensar.

**DUODÉCIMO:** Que habiéndose dictado sentencia condenatoria en todos los rubros demandados, y careciendo las demandadas de motivos plausibles para litigar, deberá hacerse lugar a la petición de los demandantes en orden a revocar la sentencia en esta parte, imponiendo las costas de la causa a los perdidosos.



Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes, 764 y 772 del Código de Procedimiento Civil, se declara que:

**I. SE RECHAZA**, el recurso de casación en la forma deducido por don Jorge Fidel Castro Allendes, en contra de la sentencia de fecha veintidós de marzo del año dos mil diecinueve.

**II. SE REVOKA** la referida sentencia, en cuanto rechazó la demanda respecto de las demandadas Auditores Consultores Riveros Asociados S.A. y BDO Chile Riveros Asociados S.A. y no condenó a todos los demandados al pago de las costas de la causa y en su lugar **se declara** que se condena solidariamente a dichas empresas y al demandado Waldo Arnoldo Riveros Saavedra al pago de las indemnizaciones fijadas en autos, y al pago de las costas de la causa.

**III. SE CONFIRMA**, en lo demás apelado, la referida sentencia, **CON DECLARACIÓN** que se eleva el monto que deberán pagar solidariamente todos los demandados por concepto de daño emergente a la suma de \$78.696.215 (setenta y ocho millones seiscientos noventa y seis doscientos quince pesos).

**IV.** Las demandadas pagarán las costas de los recursos.

Regístrese y devuélvanse con sus agregados.

**Ro1 690-2019 (CIV)**

Redactada por el Ministro Titular Sr. Dinko Franulic Cetinic.

PXCKPZVTFG



PXCKPZVTFG

Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Antofagasta integrada por los Ministros (as) Oscar Claveria G., Virginia Elena Soubllette M., Dinko Franulic C. Antofagasta, dieciséis de junio de dos mil veinte.

En Antofagasta, a dieciséis de junio de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

